**JUCIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO**

EXPEDIENTES: SUP-JDC-307/2014 Y
ACUMULADOS SUP-JDC-308/2014,
SUP-JDC-309/2014, SUP-JDC-
310/2014.

ACTORES: JESÚS ENRIQUE
ALDACO QUIÑONES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA
CONSTITUCIONAL-ELECTORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE NAYARIT

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA
DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: ROBERTO JIMÉNEZ
REYES

México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil
catorce.

VISTOS, para resolver en los autos de los juicios para
la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano al rubro indicados, promovidos por Jesús
Enrique Aldaco Quiñones, José Alfredo González Cabral,
Ramón Fuentes López y Julio Abel García Vega,
respectivamente, a fin de controvertir la sentencia dictada
por la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Nayarit, en el expediente SC-E-
JDCN-16/2013 y sus acumulados, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De los hechos narrados y de las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:

a. El tres de julio de dos mil once, se llevó a cabo la contienda a fin de elegir, entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit.

b. El diecisiete de septiembre de dos mil once, se realizó la instalación del referido Ayuntamiento, para el período 2011-2014.

c. El treinta y uno de octubre de dos mil trece, los ahora actores presentaron ante la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir el ajuste que se realizó en su compensación, a partir de la primera quincena de abril del año próximo pasado.

d. El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Sala responsable emitió sentencia en el juicio local para la protección de los derechos político-electorales SC-E-JDCN-

16/2013 y sus acumulados, en el sentido de sobreseer los juicios señalados.

e. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El nueve de marzo de la presente anualidad, a fin de controvertir la sentencia que decretó el sobreseimiento de sus medios de defensa ciudadanos, los ahora enjuiciantes presentaron demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, las cuales fueron remitidas a esta Sala Superior.

II. Turno. Mediante acuerdos de diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictados por el Magistrado Presidente de esta Sala Superior, se turnaron los expedientes a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos del artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual se cumplimentó a través de los oficios suscritos por el Secretario General de Acuerdos.

III. Tramitación. En su oportunidad, la Magistrada Instructora, radicó, admitió y declaró cerrada la instrucción de los asuntos, quedando en estado de dictar sentencia y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es formalmente competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por diversos ciudadanos quienes aducen la vulneración a su derecho político-electoral, de ser votados en su vertiente de recibir una remuneración por el desempeño de sus cargos de elección popular.

SEGUNDO. Acumulación. De la lectura integral de los escritos de demanda, se advierte que los actores impugnan destacadamente la sentencia emitida por la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, que sobreseyó sus juicios para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, a través de los cuales planteaban la indebida reducción de su compensación económica.

En ese sentido, al existir identidad en el acto controvertido, autoridad señalada como responsable y pretensión de los recurrentes, se surte la conexidad de la causa; de ahí que con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 86, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decreta la acumulación de los expedientes SUP-JDC-308/2014, SUP-JDC-309/2014 y SUP-JDC-310/2014 al SUP-JDC-307/2014, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según se advierte de los autos de turno.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutive de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados.

TERCERO. Procedencia. Los medios de impugnación reúnen los requisitos formales y de procedencia previstos en la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se examina:

- **Formalidad.** Se satisfacen las exigencias establecidas en el artículo 9, párrafo 1, de la citada ley adjetiva electoral, en razón de que en los escritos de demanda se hace el señalamiento del nombre de los actores, la identificación del acto impugnado y de la autoridad señalada como responsable; la mención de los hechos y agravios que afirman les causa el acto reclamado; y asimismo, obra su firma autógrafa.

- **Oportunidad.** Se considera que los escritos de impugnación que se examinan fueron presentados oportunamente.

Esto, ya que la sentencia que ahora se controvierte, se notificó a los ahora actores el cinco de marzo del año en curso, y sus demandas fueron presentadas el nueve del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de cuatro días que prevé la ley procesal electoral federal.

- **Legitimación e interés jurídico.** Se tiene por cumplida la exigencia prevista en los artículos 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que los juicios

son promovidos, por ciudadanos, por su propio derecho, quienes aducen la violación de su derecho político-electoral de ser votados, en su vertiente de recibir una remuneración por el desempeño de su encargo.

En cuanto hace al interés jurídico, igualmente debe tenerse por satisfecho, ya que los ahora actores fueron quienes promovieron los juicios ciudadanos locales, sobre los cuales recayó la determinación cuya legalidad ahora se analiza.

- **Definitividad.** Se encuentra colmado este requisito, toda vez que en contra de la sentencia que ahora se combate, no procede algún medio de defensa que deba agotarse previamente a la presentación de los juicios que nos ocupan.

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos de procedencia y procedibilidad de los presentes juicios, y no advertirse el surtimiento de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento establecidas por los artículos 9, párrafo 3; 10 y 11, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Agravios. Las alegaciones que, de forma coincidente, formulan los enjuiciantes se hacen consistir en lo siguiente:

Como premisa fundamental se pide a esa Honorable Sala Superior para que ejerza el Control de Convencionalidad previsto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como realice la interpretación directa de los artículos 1, 14, 16, 17, 115 base IV penúltimo párrafo y 127 base I de la citada Carta Fundamental, con apego al principio al "principio pro homine" o "pro personae".

Lo anterior, derivado de que la resolución recaída en fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano Nayarita, con número de expediente SC-E-JDCN-16/2013 Y ACUMULADOS, emitida por la autoridad responsable conculca el principio constitucional, contemplado a su vez en los tratados internacionales, relativo a las acciones afirmativas relacionadas con los derechos políticos-electorales a ser votado en su aspecto de ejercicio del cargo, a que toda persona tenemos derecho de contar con recursos sencillos y efectivos ante los tribunales competentes, que nos protejan contra actos que violan nuestros derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna o convenciones internacionales, en tal razón, solicito a esa H. Sala Superior, ejerza control de convencionalidad previsto en el artículo 1o Constitucional, haciendo una interpretación directa conforme al texto constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, bajo el principio pro persona.

De conformidad con el artículo 1 constitucional, reformado en el año dos mil once, se considera que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales en la materia, suscritos por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia.

Por tanto, se ha considerado que el control de convencionalidad implica que, cuando se planteen discrepancias entre normas convencionales y constitucionales, los tratados internacionales en

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

materia de derechos humanos deberán interpretarse en forma armónica con la Constitución Federal, de manera que se garantice la mayor protección, atendiendo al principio pro personae, salvo que se trate de limitaciones o restricciones establecidas expresamente en la Constitución.

Al respecto, cabe hacer precisiones de que el control de constitucionalidad se encuentra encaminado a la tutela del principio de supremacía constitucional.

Por su parte, el control de convencionalidad está enfocado a la observancia del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente, de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

Respecto al control de legalidad, éste tiene como objetivo central la vigencia del principio de seguridad jurídica, de modo que todo acto de molestia o de afectación de derechos, sea emitido por autoridad competente; conforme a las formalidades esenciales del procedimiento; por escrito; y, que se encuentre debidamente fundado y motivado. Dicho en otras palabras, que la actuación de las autoridades se sujeten estrictamente a lo previsto en la ley.

La suma de todos estos controles, debe tener como resultado la prevalencia del Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Sólo la observancia de la Constitución General de la República, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de la ley, garantiza la existencia de una sociedad democrática.

El control de constitucionalidad tiene como principal objetivo, la salvaguarda del principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133 de la propia Ley Fundamental. En la materia electoral, de conformidad con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, el Constituyente Permanente determinó que el control de constitucionalidad correspondiente se construya sobre el modelo siguiente:

Por cuanto hace a nuestro máximo Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le fue refrendado la competencia exclusiva para conocer, mediante el control abstracto, de las posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República, en términos del artículo 105, fracción II, de la propia Ley Fundamental; y,

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

Por otro lado, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral, será la máxima autoridad jurisdiccional en dicha materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

A ese Tribunal constitucional especializado en materia electoral, se le atribuyó el control concreto de constitucionalidad, al determinar que sus Salas podrán resolver, en el caso concreto, la no aplicación de leyes sobre materia electoral contrarias a la Ley Fundamental; ello, según lo previsto en el numeral 99 de la Constitución General de la República.

Por cuanto al control de convencionalidad, por decreto publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente:

"Artículo 1o." (Se transcribe)

De conformidad con el citado precepto constitucional, es de destacarse que, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales en la materia, suscritos por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia.

El referido principio constitucional también fija un parámetro obligatorio de carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, constituye una norma que obliga, entre otros, a los órganos jurisdiccionales a interpretar las disposiciones aplicables conforme al texto constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio *pro homine o pro persona*.

De la misma manera, respecto a la disposición constitucional en comento, se precisa que todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Bajo esa óptica, cuando el precepto constitucional bajo análisis dispone que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ello implica que se realice de manera universal, esto es, a todas las personas por igual, lo que implica que el ejercicio de un derecho humano necesariamente debe ser respetado y protegido, conjuntamente con los demás derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse ni dispersarse, y cuya interpretación se debe realizar de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos.

Por tanto, este tipo de interpretación, en particular, por parte de los juzgadores obliga a realizar:

a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, procurando en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias 12 interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir la que se más acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

Como se advierte, en el referido sistema de control de la convencionalidad, el bloque de constitucionalidad ocupa la cúspide del orden jurídico mexicano; los jueces del país, al realizar el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos están obligados a preferir los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, por encima de cualquier norma inferior.

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

Así, la relación jurídica que se da entre los tratados y lo dispuesto por la Constitución, se encuentra prevista en los artículos 1º, primer párrafo, y 133, de la propia Constitución, de los que se advierte la prevalencia del bloque de constitucionalidad en materia de Derechos Humanos.

Por tales motivos y conforme al orden jurídico examinado, en el ámbito interno, el control de convencionalidad implica que, cuando se planteen discrepancias entre normas convencionales y constitucionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos deberán interpretarse en forma armónica con la Constitución Federal, de manera que se garantice la mayor protección, atendiendo al principio "*pro personae*", salvo que se trate de limitaciones o restricciones establecidas expresamente en la Constitución.

No obstante, es importante destacar que, cuando la restricción a derechos humanos previstos en la Constitución o en los instrumentos internacionales se encuentre establecida en la legislación secundaria, tal restricción o limitación deberá sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, ya que la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos ya que no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones.

En el entendido que, dichas limitaciones no deben ser arbitrarias, caprichosas o injustificadas, sino que para que resulten válidas, deben estar sujetas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.

En efecto, la restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.

Por lo que la fuente del agravio consiste en lo determinado por la autoridad responsable en el resolutivo único y considerando primero, establecidos en las fojas 4 a la 18 de la sentencia de fecha cuatro de marzo del presente, de los cuales claramente se advierte, una violación a mis derechos políticos-electorales, por las siguientes razones:

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

1. Es destacable señalar que ocupar el cargo de Regidor Municipal, es un mandato constitucional, pues es elegido por una elección directa del pueblo para integrar un Ayuntamiento, que dicho cargo es obligatorio pero no gratuito, ya que recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual se fijara en el presupuesto de egresos correspondiente, y que la remuneración es toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, salvo los apoyos gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, lo anterior con fundamento en lo establecido en nuestra Carta Magna en los artículos 115 base I y IV penúltimo párrafo, 127, base I, que a la letra dicen:

"Artículo 115". (Se transcribe)

"Artículo 127". (Se transcribe)

Como puede advertirse de las disposiciones Constitucionales señaladas, los ayuntamientos son la forma de gobierno de cada Municipio, y éste está integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, los cuales son elegidos a través de una elección directa, y que dichos servidores públicos recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual será determinada anualmente en los presupuestos de egresos, y que la compensación es parte de dicha retribución que reciben. Por lo tanto, al no cumplir con los extremos señalados en estos preceptos constitucionales las autoridades responsables primigenias, es claro que están violentando mis derechos políticos-electorales.

2. Asimismo, me causa agravio que la Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial de esta Entidad Federativa, en la foja 12 a la 16 de la sentencia hoy recurrida, determina que mi prestación reclamada en el medio de impugnación local encuadra en un acto administrativo y no en la violación de mis derechos políticos-electorales a ser votado en su aspecto de ejercicio del cargo, ello supuestamente en lo establecido en los artículos 200 y 201 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que señalan que es facultad de los Ayuntamientos aprobar las remuneraciones de sus integrantes en sus presupuestos y que de la misma manera tienen la facultad de modificar la remuneración vía modificación a su presupuesto, sin embargo, la responsable cae en un error y hace

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

una mala interpretación de lo señalado en los citados artículos, para que dicha aprobación y modificación se dé a un presupuesto tiene que aprobarse por la Mayoría Absoluta del Ayuntamiento y aparte el acta que se levante de cada sesión para tener validez plena debe cumplir con lo ordenado en el artículo 59 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que establece que las actas deben ser firmadas por todos los integrantes del ayuntamiento que participaron en la sesión.

Por lo tanto, al pretender hacer valer a través de una supuesta aprobación de cabildo, la reducción a la compensación a la cual tengo derecho por ocupar un cargo de elección popular, y que claramente conforme a lo señalado en el precepto 127 de nuestra Carta Magna, tengo derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño del cargo, como es el caso que nos ocupa, dicho acto se vuelve ilegal, y en consecuencia, el descuento o reducción a mi compensación del ejercicio fiscal 2013 es violatoria a mis derechos políticos-electorales a ser votado en su aspecto de ejercicio del cargo.

Máxime, que nunca existió una justificación legal ni procedimiento administrativo alguno por parte de las autoridades primigenias, del porque la reducción de mi compensación, la cual forma parte de la remuneración que recibo por el desempeño del cargo de Regidor municipal que ocupó, aunado a que nuestra Ley Suprema, señala que la remuneración es determinada anualmente en los presupuestos de egresos e irrenunciable.

Por ende, al no cumplir con los extremos referidos en líneas superiores existe una violación a nuestros derechos humanos, previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que establecen que todas las autoridades, dentro de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones, o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos; así también, nadie puede ser molestado en su persona o posesiones sin mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; toda persona tiene derecho a que se le administre

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

justicia mediante tribunales que estarán expedidos para tales efectos, garantizando en todo momento la independencia de los tribunales y la ejecución de sus sentencias, tal es el caso, que sin existir estos requisitos constitucionales se ejerzan actos de molestia que afectan mi retribución salarial; violentando con ello mis Derechos Político-Electorales aquí precisados, razón de más para comparecer ante esta instancia jurisdiccional, toda vez que sin mediar juicio y/o procedimiento alguno se me redujo mi compensación para el ejercicio fiscal 2013, más aún, cuando de forma tajante vote en contra de la supuesta sesión de cabildo, es decir, que de conformidad a lo establecido en la Carta Magna en su artículo 127, el salario que percibo es irrenunciable.

3. De igual forma, me causa agravio que la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante resolución determine que el acto impugnado de origen lo considere como administrativo, cuando del propio escrito de demanda se dejo de manifiesto que es una estrategia del presidente municipal y demás responsables para afectar a quienes no formamos parte de sus decisiones internas en el ayuntamiento, y que ahora la responsable en contubernio pretende violentar nuestro derecho de percibir la remuneración prevista en el presupuesto original de 2013, bajo el supuesto acto administrativo. Ahora bien, si la acción del presidente fuera economizar las finanzas del ayuntamiento existen otras ramas administrativas para ello, sin embargo, no lo hizo porque es claro que la pretensión del mismo es dañar a sus opositores.

Pues bien, si en el caso el ayuntamiento en su conjunto hubiera decidido que para ahorrar dinero e incrementar las arcas del municipio, debió haber pedido la colaboración de \$5,000.00 (cinco mil pesos), a cada uno de los que integramos el cabildo, y dejarlo a su voluntad, pero nunca realizar el descuento en los términos manifestados, sin embargo, es tanta la decisión del presidente municipal de dejarnos sin percepción alguna, que ya existen los juicios SC-E-JDCN-12/13 y acumulados, SC-E-JDCN-02/14, SC-E-JDCN-13/14, por los mismos motivos expuestos.

Ahora bien, en la resolución que se impugna, se omitió por completo hacer un pronunciamiento respecto al pago de daños y perjuicios a cargo de las autoridades responsables de origen, toda vez, que el suscrito en el escrito inicial de demanda lo manifesté claramente en la foja número 10.

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

Pues bien, como se advirtió en los puntos anteriores, la responsable omite realizar un estudio profundo del escrito del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano nayarita, en el cual se manifestó que a las responsables se les impusiera al pago de daños y perjuicios, en razón de que he tenido que sufragar mis gastos personales, de familia y de regidor de una forma muy raquítica, no solo porque me hayan congelados las quincenas señaladas, sino porque no me han pagado mi aguinaldo del año 2012 y 2013, así como otras deducciones que me ha realizado, las cuales ya han sido del conocimiento de esta Sala en los juicios SC-E-JDCN-12/1 3 y acumulados, SC-E-JDCN-02/14 y SC-E-JDCN-03/14.

Por ello, mi inconformidad del resolutivo que se impugna, además de existir una violación a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben cumplir las resoluciones de los juicios electorales, previsto en el artículo 135, Apartado D de la Constitución Política del Estado de Nayarit, mismo que dice:

"Artículo 135". (Se transcribe)

Por último, existe una violación procesal que sin lugar a duda trasciende a mi esfera jurídica, como lo es la falta de notificación personal o en el domicilio autorizado, lo anterior al tenor de lo siguiente:

Como puede advertirse de los artículos 33, 34 y 89, fracción I de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, los cuales dicen:

"Artículo 33". (Se transcribe)

"Artículo 34". (Se transcribe)

"Artículo 89" (Se transcribe)

De lo anterior, se puede concluir que la ley en estudio pretende dar certeza a los actos jurídicos emanados de una autoridad electoral, en tal sentido, las notificaciones a los actores o terceros deben ser notificadas de forma personal o en el domicilio, y en su caso bajo el procedimiento que establece el propio cuerpo normativo, pero nunca en dejar en estado de indefensión a los participantes en el juicio que se sustancie como es el caso, por ello, considero que existen una violación procesal en mí contra, porque si bien es cierto tampoco en la sentencia que se impugna se estableció que se notificara de forma personal, vulnerando mi derecho de ser

notificado, y destacando que el notificador en caso de que no me encuentre en mí domicilio realizará la misma en términos de la ley procesal electoral, pero nunca proceder a dejar las resoluciones sin el debido procedimiento legal establecido, y en caso de la ley ordinaria no prevea dicho procedimiento, se apegará a los principios generales del derecho, tal y como lo dispone el artículo 2 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.

VII. PRECEPTOS VIOLADOS.

Señalo los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracción I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, numeral 3, inciso c), 3, 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 inciso b), 25 numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 33 y 75 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que a letra dicen:

"Artículo 1o".

"Artículo 14".

"Artículo 16".

Artículo 17.

"Artículo 35".

"Artículo 115".

"Artículo 127".

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

"Artículo 2".

"Artículo 3".

"Artículo 25".

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA).

"Artículo 23".

"Artículo 25".

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

"Artículo 7".

Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

"Artículo 33".

"Artículo 75".

QUINTO. Estudio de fondo. Del análisis de los escritos de demanda signados por los inconformes, se desprende que su pretensión fundamental estriba en que se revoque el sobreseimiento decretado por la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales que promovieron, a fin de cuestionar la reducción que se realizó de su compensación como regidores del Ayuntamiento de Rosamorada, en la referida entidad.

Su causa de pedir, la hacen depender en que la referida prestación, constituye una remuneración irrenunciable derivada del cargo que desempeñan como regidores electos popularmente, de ahí que su disminución no pueda considerarse de carácter administrativa sino electoral.

Resulta sustancialmente **fundado** el agravio planteado.

Esto, ya que el acto que reclaman sí es de naturaleza electoral, según se explica a continuación:

Por principio de cuentas, es de referir que el suceso que dio origen a la inconformidad de los justiciables, según se desprende del Acta de Cabildo número 43, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo señalado por los numerales 14 y 16, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, emanó de la reunión ordinaria del cabildo de Rosamorada, Nayarit, de veintiséis de marzo de dos mil trece, en la que al tratar los Asuntos Generales, el Presidente Municipal informó a los regidores que “el veintisiete de ese mismo mes y año, se les pagaría el sueldo y compensación que se les adeudaba y que el lunes primero de abril se les pagaría la compensación”.

De igual manera, les manifestó que el Ayuntamiento atravesaba por fuertes problemas financieros, de ahí que les solicitaba *“consideraran reducir la compensación que perciben por un monto de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100) por quincena”*.

Dicha propuesta, fue aprobada por una **mayoría de ochos votos** a favor y cuatro en contra, por los miembros del cabildo.

La determinación en comento fue impugnada por los justiciables vía juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien consideró que carecía de competencia para analizar la controversia planteada, dado que el acto impugnado era de carácter administrativo y no electoral, de ahí que sobreseyó los medios de impugnación sometidos a su conocimiento.

En contra de esa determinación, interpusieron los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que ahora nos ocupan.

Ahora bien, en la materia electoral, un presupuesto para la procedencia de los medios de impugnación lo constituye, entre otros, la existencia de un acto u omisión atribuido a una autoridad o a un partido político, que afecte derechos de esta naturaleza.

En el ámbito federal, el artículo 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, y que dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de la propia Constitución.

A su vez, el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Federal dispone que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.

Por su parte, el artículo 79, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sólo procede cuando un ciudadano, por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica

en los asuntos políticos del país y, de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Asimismo, el referido medio de impugnación es procedente cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que están estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de estos garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva, criterio que ha sido recogido por esta Sala Superior, en la jurisprudencia 36/2002, cuyo rubro refiere: **"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN"**.

Lo hasta aquí expuesto permite establecer, que puede ser materia del juicio señalado, la violación a cualquiera de los derechos mencionados, siempre que se aleguen como propios y exclusivos del impugnante, con la finalidad de que

el acto o resolución reclamado se revoque, modifique o anule, para restituir al actor en el goce o ejercicio del derecho transgredido.

De forma adicional, resulta importante tener presente que esta Sala Superior, ha considerado que el derecho político electoral a ser votado, consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales de representación popular, sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual resulta electo; el derecho a permanecer en él, desempeñar las funciones que le corresponden así como a **ejercer los derechos inherentes a su cargo**.

Es decir, que el derecho a ser votado no se limita a contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior declaración de candidato electo, sino que también incluye la consecuencia jurídica de la elección, consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantenerse en él, durante todo el período para el cual fue electo el candidato triunfador además de poder ejercer los derechos inherentes al mismo.

Tal criterio fue expresado en la jurisprudencia 20/2010, cuyo rubro es el siguiente: **“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO”**.

Por otra parte, también ha sostenido que **la retribución económica es una consecuencia** jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, por tanto, obedece al desempeño de la función pública.

En ese tenor, se ha considerado que la negativa del pago de la retribución económica que corresponde a un cargo de elección popular afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de su responsabilidad, por lo que tal circunstancia se encuentra dentro del ámbito del derecho electoral.

Así las cosas, cuando la litis involucre la violación grave a los derechos inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, como es el derecho a recibir una remuneración, resulta procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales, a fin de determinar, si luego de una valoración de los hechos controvertidos se advierte la existencia de una violación al derecho político-electoral mencionado.

Este criterio, es asumido en la jurisprudencia de esta Sala Superior identificada con la clave 21/2011, con el rubro: "**CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)**".

Esto es así, ya que una remuneración aunque accesoria, es fundamental para garantizar el adecuado desempeño de los cargos de representación popular, de ahí que su supresión o cancelación supone una afectación grave al **derecho a ejercer el cargo**.

En ese sentido, cuando se reclama su violación tal circunstancia se inscribe en el ámbito electoral, pues con ello no sólo se afectan el derecho del titular a obtener una retribución por el ejercicio de su función, sino también los fines que subyacen a dicho ejercicio, como es precisamente el pleno ejercicio de la representación popular que ostenta.

En correlación con lo expuesto, es de tener presente que el artículo 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los servidores públicos de la Federación, Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, **recibirán una remuneración adecuada**

e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo cargo, o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Así las cosas, dicho precepto en su fracción I, señala que se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, **compensaciones** y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

En correlación, la Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106 prevé que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular.

Por su parte, el numeral 2 de la Ley Municipal de esa entidad, contempla que el municipio está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, de conformidad con lo señalado por el numeral 115, de la Carta Magna.

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

A su vez, en el numeral 83 de ese ordenamiento jurídico, señala que los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndico de un Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos, y **su remuneración se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes.**

En consonancia el artículo 197 de esa ley municipal, contempla que los presupuestos de egresos municipales serán aprobados por los Ayuntamientos de conformidad con sus ingresos, para regir en el año fiscal respectivo, a fin de sufragar los gastos que originen las actividades, obras y servicios públicos previstos en los planes y programas de la administración municipal.

Así las cosas, es de tener presente que en el presupuesto de egresos para la municipalidad de Rosamorada, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el veintinueve de diciembre de dos mil doce, se fijó el tabulador de sueldos de los regidores para el ejercicio fiscal 2013, de la forma siguiente:

PUESTO	No.	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO QUINCENAL			
			CATEGORIA	BASE	5%INC	QUINCENAL
REGIDORES	10	CABILDO	CONFIANZA	11,417.00	570.85	11,987.85

En el artículo cuarto, se señaló que los salarios al personal se liquidarían mediante nóminas a quincenas vencidas y se contemplarían las prestaciones y deducciones señaladas en las leyes labores y fiscales.

Finalmente, en el artículo octavo se reguló que las compensaciones y las gratificaciones no forman parte del sueldo de los Trabajadores, se entregarán por los servicios especiales que presten los trabajadores dentro o fuera de su horario de trabajo, no debiendo incluirse como aumento que altera la cantidad de otras prestaciones; además, que **el otorgar compensaciones y gratificaciones es facultad del Presidente Municipal.**

Conforme a lo expresado, puede afirmarse que la compensación, constituye una cantidad adicional al sueldo, la cual se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos relacionados con su cargo.

Así las cosas, si este órgano jurisdiccional ha considerado que en términos de los artículos 35, fracción II y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la retribución es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y por tanto obedece al desempeño efectivo de

una función pública, necesaria para el cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva, y ha quedado evidenciado que la compensación, forma parte de ese concepto, debe entenderse que cualquier afectación que a esa prestación sufra un servidor público de elección popular, sí resulta impugnabile a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su pago correspondiente constituye uno de los derechos, aunque accesorio, inherente al ejercicio del cargo.

A partir de lo expuesto, puede concluirse que la sentencia que ahora se controvierte resulta ilegal, ya que la responsable de forma incorrecta concluyó que el acto reclamado por los justiciables, consistente en la disminución que se realizó de su compensación era de naturaleza administrativa, cuando que, según se ha visto recae en el ámbito electoral.

Esto es así, pues como ha quedado evidenciado, la compensación forma parte de la remuneración, de ahí que cualquier afectación sea susceptible de impugnación, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Ciertamente, antes de dilucidar la naturaleza del ente que emitió la determinación en controversia, era menester que la responsable delimitara la clase de prestación que se reclamaba, pues eso era lo que precisamente iba a permitirle determinar la existencia o no de una potencial afectación a los derechos político-electorales de los ciudadanos de los actores.

En mérito de lo narrado, si los actores alegaban una afectación a sus derechos político-electorales, luego de la reducción de su compensación, la cual según se ha visto, sí resulta de naturaleza electoral, ello imponía que la Sala responsable hubiera analizado el fondo de la controvertida planteada, y no sobreseer de los juicios que se sometieron a su conocimiento.

En consecuencia, al resultar **fundado** el agravio hecho valer ante esta instancia jurisdiccional, lo procedente es **revocar** la resolución impugnada y, con fundamento en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, estudiar en plenitud de jurisdicción los agravios hechos valer por los justiciables, a fin de no demorar más la resolución del presente asunto.

Contrariamente a lo aducido por los accionantes, el acuerdo por el que se ordena la reducción de su compensación como regidores del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, se encuentra ajustado a derecho y, por tanto, no resulta violatorio de los derechos político-electorales de los justiciables.

Esto, ya que constituye una determinación interna, adoptada en el seno del propio cabildo que se aplicó a todos los regidores del Ayuntamiento.

De esa suerte, no se trató de una decisión unilateral dirigida a impedir u obstaculizar el desempeño de las atribuciones encomendadas a los ahora actores, sino fue una medida aprobada por la mayoría del Cabildo municipal, con el fin de ajustar financieramente el gasto del Ayuntamiento.

Tal acción, si bien implicó una disminución en una percepción accesoria al sueldo como lo fue la compensación, encontró su justificación en que había que ajustar el gasto del cabildo, a fin de eficientar sus funciones, con el objeto de cumplir con lo establecido en la propia Ley Orgánica Municipal de la entidad.

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

Lo acontecido, cobra asidero si se toma en cuenta que se realizaron “Modificaciones al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Rosamorada, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2013”, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el pasado cinco de junio de dos mil trece, sufriendo el rubro del cabildo reducciones, para quedar de la forma siguiente:

NO. PARTIDA	H.CABILDO	ORIGINAL	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	MODIFICADO
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,868,834.41	2,000,000.00		1,868,834.41
13203	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,583,994.00	800,000.00		783,944.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	4,752,000.00	3,000,000.00		1752,000.00
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	726,000.00	726,000.00		0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,316,822.41	1,583,944.00		10732,878.41
	SUMAS	23,247,650.82	8,1909,944.00	0.00	15,137,706.82
	TOTAL H.CABILDO	13,432,822.41			

En ese sentido, es claro que el acto controvertido no es susceptible de vulnerar algún derecho político-electoral de los actores, pues en nada atenta contra su derecho a ejercer la función de regidores del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, y tampoco coarta su derecho a recibir una remuneración o contraprestación por el desempeño de ese cargo, pues la reducción que se realizó en su compensación, misma que constituye una percepción accesoria al sueldo, la cual es de destacar es fijada discrecionalmente, por el Presidente Municipal, según se

previó en el propio Presupuestos de Egresos del referido Municipio para el año dos mil trece, se aplicó a todos los regidores del Ayuntamiento, a fin de hacer frente a sus problemas económicos.

En tal consecución de ideas, no puede concluirse que el acto que ahora cuestionan los enjuiciantes, atente contra sus derechos político-electorales.

Por otro lado, debe declararse **infundada** la pretensión que vierten los actores, en el sentido de debe pagárseles daños y perjuicios, pues al margen de que carece de sustento jurídico, se sustenta en la premisa errónea de que les asiste la razón en el sentido de que indebidamente les fue descontada su compensación, lo cual ha sido desestimado.

En razón de lo anterior, dado lo **infundado** de los agravios planteados, lo procedente es **confirmar** el acuerdo por el que se determina la reducción de la compensación de los regidores del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

PRIMERO. Se **acumulan** los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-308/2014, SUP-JDC-309/2014 y SUP-JDC-310/2014 al diverso expediente SUP-JDC-307/2014; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutive de la sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se **revoca** la sentencia dictada por la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en el expediente SC-E-JDCN-16/2013 y sus acumulados.

TERCERO. Se **confirma** el acuerdo, por el que se determina la reducción de la compensación de los regidores del Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit.

NOTIFÍQUESE; por **correo electrónico**, a los actores; **por oficio**, a la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y al Ayuntamiento de Rosamorada de esa misma entidad y, **por estrados**, a los demás interesados, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, párrafo 3 y 28, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 103 y 106, del

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional especializado.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que resulten pertinentes y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **UNANIMIDAD** de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

MAGISTRADA

MAGISTRADO

**MARÍA DEL CARMEN
ALANIS FIGUEROA**

**CONSTANCIO CARRASCO
DAZA**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

**MANUEL GONZÁLEZ
OROPEZA**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

**SALVADOR OLIMPO
NAVA GOMAR**

**PEDRO ESTEBAN
PENAGOS LÓPEZ**

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA

VOTO RAZONADO QUE EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS ACUMULADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES DE EXPEDIENTE SUP-JDC-307/2014, SUP-JDC-308/2014, SUP-JDC-309/2014 Y SUP-JDC-310/2014.

Aun cuando mi voto es a favor de la sentencia dictada en los juicios acumulados para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicados en los expedientes identificados con las claves **SUP-JDC-307/2014, SUP-JDC-308/2014, SUP-JDC-309/2014 Y SUP-JDC-310/2014**, emito el presente **VOTO RAZONADO**.

El sentido de mi voto favorable, al proyecto de sentencia presentado por la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, obedece, única y exclusivamente, al criterio reiteradamente sostenido por este órgano jurisdiccional, como se advierte de la tesis de jurisprudencia 21/2011, consultable a páginas ciento setenta y tres a ciento setenta y cuatro, de la *“Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral”*, volumen 1 intitulado *“Jurisprudencia”*, publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

**CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN
ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO**

**SUP-JDC-307/2014
Y ACUMULADOS**

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).— De la interpretación de los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo.

Cabe mencionar que la transcrita tesis de jurisprudencia es obligatoria, conforme a lo previsto en el artículo 233, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precepto que prevé que la jurisprudencia que establece este órgano jurisdiccional especializado es obligatoria, entre otros órganos del Estado, para la misma Sala Superior y, por ende, para los Magistrados que la integran.

Sin embargo, también debo precisar que al establecer, la Sala Superior, esa tesis de jurisprudencia, el suscrito votó en contra de su aprobación, dado que mi criterio es diverso al sostenido en el criterio sustentado por mayoría de votos.

Cabe señalar, que respecto de las sentencias dictadas en los incidentes de inejecución de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-408/2008 y SUP-JDC-466/2008, así como de la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-5/2011, constitutivas de los precedentes que dieron origen a la tesis de jurisprudencia citada, emití voto particular, porque consideré que el pago de

las remuneraciones a que puedan tener derecho los servidores públicos de elección popular, por el desempeño del cargo para el cual fueron electos, no constituye un derecho de naturaleza político-electoral, que pueda ser tutelado mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales, ya de carácter principal o incidental.

Por cuanto ha quedado expuesto, emito este **VOTO RAZONADO**, en los juicios acumulados para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro identificados.

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA